

Identidades, etnicidad y racismo en América Latina

Fernando García, compilador

Identidades, etnicidad y racismo en América Latina



Índice

Presentación	9
Introducción	11
<i>Fernando García Serrano</i>	
I. LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO	
La normalización multicultural en la Guatemala neoliberal post conflicto	27
<i>Santiago Bastos</i>	
Movimiento cocalero, política y representación: los casos boliviano y peruano	47
<i>Mayari Castillo y Anahí Durand</i>	
Los movimientos indígenas en contra del Plan Puebla Panamá	73
<i>Maya Collombon Bermúdez</i>	
Bolivia: posibilidades históricas de la autodeterminación indígena o reforma criolla	87
<i>Pablo Mamani</i>	

© De la presente edición:

FLACSO, Sede Ecuador
La Pradera E7-174 y Diego de Almagro
Quito - Ecuador
Telf.: (593-2) 323 8888
Fax: (593-2) 3237960
www.flacso.org.ec

Ministerio de Cultura del Ecuador
Avenida Colón y Juan León Mera
Quito-Ecuador
Telf.: (593-2) 2903 763
www.ministeriodecultura.gov.ec

ISBN: 978-9978-67-187-0
Cuidado de la edición: Paulina Torres
Diseño de portada e interiores: Antonio Mena
Imprenta: Ripergraf
Quito, Ecuador, 2008
1ª. edición: noviembre, 2008

II. LOS INDÍGENAS URBANOS
Y LA GLOBALIZACIÓN

**Indígenas urbanos en Quito:
el proceso de etnogénesis del pueblo Kitukara** 107
Álvaro Gómez Murillo

**La discriminación laboral de los indígenas
en los mercados urbanos de trabajo en México:
revisión y balance de un fenómeno persistente** 121
Jorge Horbart

**La construcción de la identidad mapuche en contextos
urbanos y rurales de la Wall Mapu, Argentina** 159
Mirta Millán Ramírez

**Redefiniendo identidades culturales.
Jóvenes universitarios migrantes en el altiplano peruano** 181
Luis Rivera Vela

**Identidades, traducao e hibridismo:
a problemática dos Guarani e Kaiowá urbanos
no estado de Mato Grosso do Sul/Brasil** 203
José Trajano Vieira

III. DERECHO, SOCIEDAD E INTERCULTURALIDAD

**Proteccionismo humanista:
retórica y praxis del neo indigenismo en el Ecuador** 229
Gina Chávez Vallejo

**El pluralismo jurídico y político a partir del caso
de las rondas campesinas de Cajamarca** 247
Emmanuelle Piccoli

**Mujeres indígenas, justicia y derechos:
los retos de una justicia intercultural** 269
María Teresa Sierra

**La política de la multiculturalidad en México
y sus impactos en la movilización indígena:
avances y desafíos en el nuevo milenio** 289
Laura Valladares

IV. RACISMO Y PUEBLOS AFRO DESCENDIENTES

**Racismo e identidades na luta em torno de um
programa de reserva de vagas –cota étnica– para
ingresso em cursos de uma universidade pública do Brasil.
Relato e análise de caso** 311
Joao Marcos Alem

Movimiento cocalero, política y representación: los casos boliviano y peruano

Mayari Castillo* y Anahí Durand**

Introducción

La problemática de la producción de hoja de coca en la zona andina es un tema complejo, relacionado con las formas de encarar el desarrollo, la democracia y la relación entre América Latina y el mundo. Los países productores, como Perú y Bolivia, deben ensayar soluciones al problema del narcotráfico bajo los condicionamientos de la política antidrogas norteamericana, caracterizada por su sesgo represivo. Desde esta mirada, los productores cocaleros son un eslabón más de la cadena de producción de cocaína que vía los circuitos del narcotráfico va a parar a los consumidores del Primer Mundo. Desde nuestro punto de vista, los productores cocaleros son también actores que han construido su protagonismo desde los márgenes del sistema en base a una plataforma que oscila entre lo ilegal y lo legal. Son sujetos políticos que han puesto en marcha procesos de movilización, interpelando a la sociedad sobre la realidad de miles de campesinos pobres que cultivan la coca y que exigen respuestas más allá de su simple prohibición.

En el marco de sistemas políticos incapaces de canalizar las demandas de amplios sectores de la población, los movimientos cocaleros de Bolivia y Perú generan rupturas en los cercos institucionales. Así, la movilización y la protesta se configuran como herramientas centrales para la consecución

* Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.

** Instituto de Estudios Peruanos.

ción de sus objetivos. Junto a esto, la participación en estructuras formales de representación se constituye también en una práctica cada vez más asumida por el movimiento.

La participación en la arena política institucional no sólo influye en las estrategias del movimiento cocalero, sino que en determinadas circunstancias lo fortalece o debilita, transformando su rol en el sistema político. Por esta razón, es importante analizar el proceso de constitución del movimiento cocalero en Bolivia y Perú y su decisión de generar nuevas estrategias de acción colectiva. Asimismo, es central explorar el impacto de los movimientos cocaleros en las instituciones democráticas indagando en cómo consiguen la modificación de enclaves autoritarios en los sistemas políticos latinoamericanos.

El objetivo de esta ponencia es analizar la participación del movimiento cocalero boliviano y peruano, enfatizando en los espacios institucionales, analizando sus principales costos, logros e impactos en el sistema político nacional. Pese a las divergencias innegables de cada país, encontramos un elemento común que guía el estudio: la demanda por inclusión de sectores históricamente ignorados por el sistema político. Buscamos aquí ensayar una mirada comparativa de los procesos de organización, movilización y participación política de los productores cocaleros en Perú y Bolivia, no para señalar los éxitos o fracasos de uno u otra experiencia, sino como un aporte para entender la complejidad de los procesos que actualmente viven.

El proceso cocalero en el Perú

La organización cocalera en el Perú

La producción cocalera en el Perú abarca catorce cuencas de selva alta en diez distintas regiones del país. Desde que en 1961 la Organización de Naciones Unidas colocó a la hoja de coca en la lista de estupefacientes prohibidos, la principal distinción que se establece en torno a la producción de coca radica en el carácter legal o ilegal del cultivo. La aceptación del dictamen de la ONU por parte del Perú implicó la adopción de medidas tales como la creación del “monopolio” estatal de supervisión de la

coca y cocaína (ENACO) y la promulgación en 1964 del D.S. 254 que limitó las zonas autorizadas de producción de coca a determinados valles del Cusco y Puno. Estas medidas dejaron en la ilegalidad a vastas extensiones de cultivo, que constituían cerca del 95 por ciento de la producción total de coca, ubicadas principalmente en El Valle del Alto Huallaga entre los departamentos de Huánuco y San Martín, y el Valle del Río Apurímac entre Ayacucho y Cusco (Gootenberg, 2003). En 1979, se aprueba el Decreto N° 22305 que sella el primer convenio de represión de drogas con los Estados Unidos y pone en marcha diversos operativos policiales¹ con resultados pobres en cuanto a destrucción de laboratorios de cocaína, pero lamentables en cuanto al uso de la violencia contra la población.

Esta represión estatal generalizada impulsó la organización de los productores cocaleros que exigían al gobierno soluciones más allá de la simple erradicación de los cultivos, en un contexto influido por el alza de precio de la cocaína y el posicionamiento de los carteles colombianos. En el Alto Huallaga surgió el Comité Regional de Productores de Coca de la Provincia de Leoncio Prado y Anexos (CRPCLP-A) y en el Valle del Río Apurímac fue fundada la Federación Campesina del Valle del Río Apurímac (FECVRA), una de las más importantes organizaciones de Ayacucho.

Los nacientes esfuerzos organizativos de los productores cocaleros se vieron interrumpidos por la irrupción del conflicto armado interno. En 1982, Sendero Luminoso llegó a los dos principales valles: el Huallaga y el Apurímac, considerados claves por su posición geográfica y los recursos que podían proveer vía el negocio de la droga. En el Huallaga, siguiendo la estrategia de anular todo esfuerzo de organización autónoma, Sendero socavó la legitimidad de la CRPCLP-A promoviendo a los FEDIP (Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo); organismos poco estructurados con múltiples demandas subordinadas a las necesidades políticas definidas por el “partido”. El trabajo con los FEDIP fue parte de la estrategia

1 Nos referimos a la ejecución de los operativos policiales Verde Mar I, Verde Mar II, Bronco I y II donde según denuncias de la época se vulneraron los derechos humanos de los campesinos del Alto Huallaga, destruyéndose sus cultivos y deteniendo a los principales dirigentes cocaleros. Ver al respecto: Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2004).

de Sendero cuya presencia en un primer momento fue bien recibida por los pobladores, pues según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), los cocaleros esperaban que este grupo subversivo los defendiera de la represión estatal y de los abusos de los carteles del narcotráfico.

En el Valle del río Apurímac Ene (VRAE), la presencia de Sendero Luminoso buscó también controlar la totalidad de la zona pero se encontró con un abierto rechazo por parte de los campesinos, quienes a partir de 1984 empezaron a organizarse en grupos de campesinos armados denominados comités de autodefensas (CAD). La vorágine de violencia que enfrenta a subversivos, autodefensas y al ejército hacen que el Río Apurímac sea una de las zonas más afectadas por una guerra que se prolonga hasta mediados de los años noventa cuando Sendero Luminoso es expulsado de la selva ayacuchana².

Superada la etapa de mayor violencia, los campesinos retoman la producción agraria, siendo la hoja de coca un cultivo prioritario. El incremento de las hectáreas cocaleras, coincidente con una nueva alza en los precios internacionales de la coca y el ascenso del gobierno conservador de George Bush a la presidencia de los Estados Unidos, lleva al gobierno peruano a retomar las actividades de erradicación de los cultivos. Presionados por esta nueva oleada represiva, los cocaleros de los diferentes valles inician coordinaciones, protagonizando un segundo momento organizativo. La salida del fujimorismo y la desmilitarización de las zonas cocaleras facilitan la organización de los productores. El 20 de enero de 2003 se funda en Lima, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las cuencas cocaleras del Perú (CONPACCP) conformando la directiva Nelson Palomino del VRAE y Nancy Obregón y Elsa Malpartida del Valle del Huallaga.

Si bien la existencia de la CONPACCP ha estado signada por las disputas internas ha desarrollado con éxito diversas acciones de protesta que han puesto a los cocaleros al centro del escenario nacional. Es el caso de la marcha de sacrificio a Lima realizada en marzo del 2003 en la que se movilizaron más de 6000 cocaleros consiguiendo que: la Confederación

2 Al parecer todavía en el Valle del Río Apurímac Ene quedan algunas columnas senderistas (aproximadamente 200 hombres) pero muy aisladas y al servicio de los carteles del narcotráfico.

sea reconocida como interlocutor válido, que la opinión pública y los medios de comunicación percibieran que los productores cocaleros no son delincuentes ni terroristas y que el presidente Toledo dialogará directamente con la dirigencia cocalera (Cabieses, 1998). La marcha de sacrificio dejó irresueltos algunas exigencias que posteriormente fomentan las discrepancias internas tales como el pedido de libertad para Nelson Palomino,³ el cese de las erradicaciones forzosas y el re empadronamiento de los cocaleros en ENACO. Estos temas y las discusiones sobre el destino de fondos obtenidos para la marcha de sacrificio, producen la primera fractura de la organización reflejando las dificultades de la CONPACC para consolidarse como gremio nacional permaneciendo las diversas cuencas permanecen como núcleos de poder local reacias a aceptar dirigencias nacionales que minen su influencia en las respectivas zonas. Sólo a fines del 2005 los distintos valles cocaleros vuelven a confluir en el IV Congreso de la CONPACC realizado en Ayacucho.

En suma, los esfuerzos cocaleros por constituir una organización nacional han pasado por dos momentos importantes, coincidentes con la intensificación de las políticas represivas del Estado. El último intento organizativo plasmado en la CONPACC evidencia una persistente debilidad para lograr una cohesión que fortalezca la capacidad de negociación e interlocución del gremio pero logra sostenerse como un referente organizativo importante para miles de pobladores de la selva en el Perú.

Movimientos sociales: identidad y conflicto

Un movimiento social puede ser definido como una red de relaciones sociales que producen un sentido colectivo de la acción, caracterizándose por la identificación compartida de intereses y la delimitación de un campo de conflicto. De acuerdo a esto, para analizar el proceso de construcción de los productores cocaleros como movimiento social nos detendremos

3 Nelson Palomino fue apresado a fines de 2003 acusado de secuestro y otros delitos contra el orden público. Si bien todas las cuencas aceptan incorporar el pedido de su libertad como una demanda principal, no hay acuerdo sobre cómo conducir su defensa. Finalmente sale libre en junio de 2006.

mos en la identidad compartida por los productores y el campo de conflicto construido.

Para Melucci (2002) la identidad colectiva refiere a la capacidad de los sujetos para definir expectativas comunes, evaluando en conjunto límites y posibilidades de la acción. En el Perú, las migraciones y la violencia política son factores que influyen decisivamente en la construcción de la identidad cocalera. Las oleadas migratorias que colonizan los valles cocaleros del Perú se inician a principios del siglo XX con la instalación de las “delegaciones de tierras de montaña” que introducen en la selva cultivos como el maíz, la caña de azúcar y el “cube”, cuya raíz era muy utilizada en la fabricación de insecticidas. En la década de los años sesenta, se produce una nueva oleada cuyo principal incentivo son los precios cafetaleros pero también el cultivo de coca que empieza a ser cotizado por las mafias cubano americanas y los carteles colombianos. Son dos los tipos de colonización que se producen: el Río Apurímac: basado en relaciones de parentesco que mantienen el lazo con la comunidad andina y el Huallaga: llevada a cabo por campesinos sin tierra o peones de la costa y la sierra norte que rompen vínculos con sus comunidades de origen. En ambos casos son procesos protagonizados por actores poco politizados y sin trayectoria organizativa previa.

Los esfuerzos organizativos iniciales de estos colonizadores se ven cortados por el conflicto armado interno que impacta decisivamente en la constitución de la identidad cocalera. En el caso del VRAE, Sendero Luminoso desata una gran violencia que se agrava con la llegada de la Infantería de Marina, encargada de la lucha antiterrorista en la zona⁴. Se corta así el esfuerzo de organización autónoma de los pequeños productores y la prioridad pasa a ser la autodefensa. El surgimiento de los CAD y la supuesta alianza temporal que establecen con los narcotraficantes⁵, envuelve a los productores en una dinámica de guerra que afianza com-

ponentes propios de un escenario de guerra como la polarización y el autoritarismo. En el valle del Huallaga, el conflicto armado se expande en un contexto donde los narcotraficantes habían impuesto su ley ante la complicidad de los escasos agentes del Estado ahí presentes. Sendero Luminoso se asienta como agente ordenador y se constituye como referente de organización en la vida cotidiana de miles de familias cansadas de los abusos. Tras el triunfo de Fujimori y a costa de una gran violencia el ejército consigue el repliegue de Sendero Luminoso, aunque para los campesinos la pacificación signifique también convivir con posturas radicales, violentas y jerarquizadas.

En cuanto a la definición del campo de conflicto gira en torno a dos ejes principales: a nivel local las demandas se dirigen a la cooperación internacional y, a nivel nacional las exigencias se dirigen al Estado. En cuanto al primer eje, la implementación de proyectos de desarrollo alternativo (PDA) se remite a mediados de la década del noventa en que se incrementa el apoyo de agencias de cooperación internacional como el Fondo de Naciones Unidas, el Fondo Perú-Canadá, AID, entre otros. Si bien en un primer momento hay una coordinación entre las ONG y los productores, el panorama varía radicalmente el año 2000 en un contexto signado por el alto precio de la hoja de coca en el mercado internacional y la caída de los precios del café y el cacao, principales productos promocionados por los PDA. Los cocaleros critican la ineficiencia de las ONG y exigen se diferencie al cocalero del narcotraficante realizando una serie de protestas que en el caso del Río Apurímac culminan con la quema del local de CARE Perú y el encarcelamiento del dirigente Nelson Palomino en febrero de 2003.

A nivel nacional, el conflicto se orienta progresivamente a la confrontación con el Estado y las políticas antidrogas. En las movilizaciones lideradas por la CONPACC, las plataformas reclaman al Estado el cese de las erradicaciones y la implementación de una política de desarrollo que ofrezca alternativas productivas reales. En estas acciones resalta la acción de Nelson Palomino del VRAE y Nancy Obregón y Elsa Malpartida del Valle del Huallaga, quienes con distintos matices son representativos de una nueva generación que comparte una socialización primaria influenciada por el conflicto armado, tanto con el radicalismo autoritario sende-

4 Los “marinos” cometen múltiples abusos contra la población tales como el asesinato en la base principal de la Marina del líder de la FECVRA, Julio Orozco Huamani. Ver Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004).

5 Esta alianza en pleno boom del precio de la coca entre 1984 -87, llevó a los narcotraficantes a pagar cupos que permitieron a los CAD comprar armas y pagar a grupos de campesinos para que se dediquen a tiempo completo al enfrentamiento antiterrorista (CVR, 2004).

rista como con el ejército y sus iniciativas pacificadoras. Estos líderes activan un momento de descontento generalizado, donde los discursos radicales coinciden con el sentir de las bases.

Tenemos así un movimiento cocalero cuya identidad se halla marcada por la experiencia de migrantes con escasa tradición política y por el peso de la violencia que influye en la politización de los cocaleros, haciéndola proclive a una polarización poco ideologizada pero muy radical que otorga mucho peso a los liderazgos. En esta dinámica de movilización, los cocaleros delinean un campo de conflicto desde donde interpelan cada vez más al Estado asumiéndolo como un espacio donde concretar sus demandas: la arena electoral es vista como un escenario de disputa a conquistar.

Participación electoral del movimiento cocalero

Para entender la participación política del movimiento cocalero es necesario detenerse en cómo y por qué la organización decide dar este paso adelante. En primer lugar resalta la existencia de una estructura organizativa que permite discutir y aprobar la participación electoral. Pese a todo, la CONPACC se mantiene como referente legitimada de articulación de la protesta y los vaivenes de los gremios locales. De otro lado, hacia fuera la CONPACC es considerada un actor importante pues agrupa a más de cinco mil cocaleros, una masa electoral nada despreciable. Finalmente, se cuentan las evaluaciones compartidas por los líderes cocaleros, quienes en un contexto de criminalización de la protesta y a la luz del triunfo de Evo Morales en Bolivia, empiezan a hablar de la necesidad de participar en el terreno político. En el IV Congreso de la CONPACC realizado el 2005 en Ayacucho, los cocaleros trazan el objetivo de conformar un instrumento político propio que les permita disputar puestos de poder a nivel nacional y local.

Si bien en el congreso de Ayacucho hay acuerdo sobre la participación cocalera en las elecciones, en medio de la agitación electoral, la CONPACC no consigue convocar un congreso que decida la forma adecuada de participación en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2006. Los dirigentes toman la decisión de apoyar a título personal las candidaturas:

Nancy Obregón lanza su candidatura al Congreso de la República y Elsa Malpartida al Parlamento Andino, ambas como invitadas del Partido Nacionalista Peruano. En un inicio, el apoyo de las cuencas cocaleras parece sólido. Los principales líderes cocaleros se reafirmaban en la decisión de pasar a la arena política, disputando puestos de poder que dieran oportunidades para concretar medidas a favor de su sector. Sin embargo, ya en plena campaña electoral, el apoyo de Palomino fue poco decidido, mientras otros líderes hicieron abierta campaña en contra de los dirigentes.

En términos de aglutinación del voto y colocación de representantes, los resultados electorales fueron favorables a ambas candidatas. La victoria fue contundente, no obstante, el proceso electoral no favoreció a la unidad del movimiento pues al interior del gremio cocalero la elección de las parlamentarias cocaleras dio lugar a discusiones y disputas de liderazgos. Lejos de avanzar en una unificación, a los pocos días de salir de la cárcel Nelson Palomino anunció la fundación de la agrupación Kuska Perú. La actitud de Palomino —siempre tendiente al caudillismo— deja claro sus pocas intenciones de convocar a los dirigentes, haciéndose evidente que no desea competencias a su protagonismo.

Para las elecciones municipales, Kuska Perú en alianza con la agrupación Qatun Tarpuy, presenta candidatos a alcaldes en todos los distritos del Valle del Río Apurímac en Ayacucho, además de candidatos a alcaldes provinciales en Huanta y La Mar. El éxito obtenido en los distritos disputados consolida el liderazgo de Palomino. Es el caso del triunfo en el distrito de Sivia donde Alejandro Gutiérrez, consigue ganar el gobierno local. En el Valle del Huallaga los principales municipios quedan en manos del Partido Nacionalista, consolidando la cercanía entre este partido y un sector del movimiento cocalero.

Ante los resultados municipales, las congresistas cocaleras saludaron el triunfo de Qatun Tarpuy, pero las diferencias y discusiones aún persisten, tal como se evidencia cuando Palomino manifiesta su apoyo al Plan VRAE impulsado por el gobierno aprista, cuyo objetivo, según DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin drogas), es combatir el narcoterrorismo e impulsar una economía estable. Para las lideresas, este Plan significa la continuidad de las políticas de erradicación.

Esta primera incursión cocalera en la competencia electoral revela victorias importantes a nivel parlamentario y de gobiernos locales. Como congresistas, las dirigentes cocaleras tienen la oportunidad de coordinar acciones y plataformas a nivel nacional e internacional, poniendo en agenda la necesidad de revisar la política cocalera. De otro lado, en los municipios del río Apurímac los cocaleros tienen la oportunidad de demostrar que pueden dirigir políticamente sus jurisdicciones desmintiendo a quienes afirman que darán carta libre al narcotráfico. No obstante, las divisiones pueden frenar estas posibilidades, limitadas todavía por la ausencia de coordinación entre los alcaldes y la representación legislativa. Es un riesgo latente que desde el gobierno local se afirme una dinámica política localista y aislada, que asegure créditos políticos a algunos dirigentes, pero que no logre tener fuerza para plantear una propuesta de conducción territorial con una mirada alternativa sobre el problema del cultivo de coca. Es evidente además que existe un distanciamiento entre los principales líderes que parecería podría frustrar la posibilidad de que los cocaleros consoliden un partido político bien articulado. No obstante el movimiento cocalero ha dado muestra de supervivencia en la debilidad. A futuro, tanto el desenvolvimiento de las autoridades electas como las posturas de los dirigentes del gremio, brindarán nuevas luces respecto a la consolidación del movimiento cocalero como alternativa de representación.

El proceso cocalero en Bolivia. El caso de Chapare boliviano

El surgimiento de nuevos actores sociales en la política latinoamericana, tales como movimientos sindicales, campesinos y estudiantiles ha planteado nuevos desafíos para las ciencias sociales: establecen identidades y estructuras organizacionales distintas y a través de diversos repertorios de acción han logrado interpelar al conjunto de la sociedad en torno a demandas de inclusión de sectores marginados.

Un ejemplo de esto ha sido el movimiento cocalero en Bolivia. No es objetivo de esta ponencia reseñar las condiciones y características de su surgimiento y consolidación como actor relevante. El gran cúmulo de bibliografía existente (Agreda, et al., 1996; Ballesteros, et al., 2001; Zegada,

2002; Stefanoni, 2003; 2004) da libertad para centrar nuestro análisis en un punto: la participación cocalera en las estructuras de representación formal. Para ello se dividirá el análisis en tres períodos: inicial, medio y avanzado. Este análisis estará precedido por una contextualización de la zona en estudio.

El Chapare y la producción de hoja de coca

El Chapare, ubicado en el departamento de Cochabamba, es una de las dos grandes zonas donde se produce la hoja de coca en Bolivia. La Ley 1008, promulgada en 1988, establece zonas de cultivo para uso tradicional, zonas de cultivo excedente en transición y zonas de cultivo ilícito. La zona de cultivo tradicional⁶ posee una cantidad de hectáreas permitidas de cultivo de hoja basado en una estimación de consumo interno para actividades tradicionales de la cultura indígena. En las zonas de cultivo excedente en transición, en donde podemos situar al Chapare⁷, se establece que existe una producción destinada a usos ilícitos que debe ser erradicada a la par de la ejecución de planes de desarrollo alternativo que permitan un desarrollo sustentable.

El Chapare es una zona que se caracteriza por un poblamiento tardío, basado en colonizaciones dirigidas (década de los años sesenta), en la relocalización de mineros exonerados de las minas de estaño (1985) y en colonizaciones espontáneas (1960-1980). Estas últimas son la principal fuente de poblamiento de la zona, impulsadas por una crisis económica de principios de la década de los ochenta y, una sequía que azoló la zona altiplánica. Sumado al aumento del precio de la hoja de coca, se produjo un crecimiento de la población, el que disminuiría a partir de las políticas de erradicación forzosa.

6 “Comprenderá las áreas de producción minifundista actual de coca de los subtrópicos de las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisivi del Departamento de la Paz y Los Yungas de Vandíola, que comprende parte de las provincias de Tiraque y Carrasco del Departamento de Cochabamba”. Ley 1008. (1988, La Paz)

7 “Comprende las provincias de Saavedra, Larecaja, Loayza, las áreas de colonización de Yungas del departamento de La Paz y las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani del Departamento de Cochabamba”. Ley 1008. (1988, La Paz)

Estructura sindical

La colonización espontánea como la relocalización de mineros del estaño es central para comprender el movimiento cocalero y su estructura organizacional.

La colonización espontánea es importante pues al establecerse población altiplánica sin apoyo estatal y sin conocimiento de las zonas tropicales, sus cultivos y riesgos, se hace necesario desarrollar redes sociales que permitan el traspaso de conocimiento sobre el trópico y el trabajo conjunto en trabajos como la tala y roza y la construcción de caminos. Así también surge la necesidad de normar el acceso a la tierra, dirimir conflictos y establecer normas mínimas de convivencia entre los vecinos. La presencia de dirigentes mineros relegados en la zona durante los períodos dictatoriales y, posteriormente, la llegada de mineros relocalizados a partir del cierre de las minas de estaño, determinó que la estructura sindical tuviese la responsabilidad de dirigir los trabajos comunes, reglamentar el acceso a la tierra y dirimir conflictos (Flores y Blanes, 1984).

El repertorio organizacional de los mineros de la COB, creado y puesto en movimiento con éxito durante parte del siglo XX fue llevado por estos dirigentes al Chapare (Rodríguez, 2000). Se estableció en la zona una estructura similar a la del sindicalismo clásico: sindicato de base - central - federación - confederación. La organización cocalera se enriquecería también con la presencia de migrantes indígenas que marcarían profundamente su discurso y organización. Ello puede verse claramente en la organización de trabajo conjunto y en la mantención de tierras comunitarias, las que funcionan bajo los tradicionales mecanismos andinos ampliamente documentados. A la par, se genera un discurso étnico, basado en la reivindicación de prácticas ancestrales como el uso de trajes tradicionales y del quechua, la whipala⁸ y el acullico⁹ como símbolos identitarios.

En el marco de una creciente demanda de hoja, la zona del Chapare muestra una tendencia al monocultivo y a la monetarización en una economía de minifundio (Flores y Blanes, 1985). Estos dos fenómenos hacen

8 Bandera de los pueblos indígenas andinos.

9 Masticar hoja de coca.

que las políticas de erradicación forzosa, puestas en marcha a partir de la promulgación de la Ley 1008, golpearan la zona y pusieran en alerta a las estructuras sindicales, las que reaccionaron defendiendo su único sustento. El primero de los grandes conflictos en la zona se genera por la negación del gobierno de incluir a las organizaciones sindicales cocaleras en la discusión de la Ley 1008. Corría el año 1987. A partir de ese momento en 1991, 1994, 1996, 1998, 2000, 2001 y 2003 existieron enfrentamientos en la zona, dejando cerca de 40 muertos y centenas de heridos y detenidos.

En el marco del conflicto, la estructura sindical se fortalece y diversifica. Surgen organizaciones de mujeres cocaleras y comités de autodefensa. Los repertorios de protesta y la centralidad de la economía de la coca en Bolivia son factores claves para observar como el fenómeno cocalero se traslada del ámbito particular al nacional.

En primer lugar, la economía de la coca, aunque no reconocida oficialmente, genera una porción importante del PIB de Bolivia. Durante la peor crisis económica, la economía ilegal de la coca permitió sustentar la aplicación de los ajustes estructurales, siendo válvula de escape de la pobreza y un nuevo espacio laboral para los ex mineros de las recién cerradas minas de la COB (Lanza, 1999). De la misma manera, frente a una economía con crecimiento estancado o negativo y uno de los índices de pobreza más altos de América Latina, la cooperación internacional radicada en Bolivia constituía una importante fuente de ingreso. En los últimos doce años, Bolivia recibió por concepto de asistencia financiera oficial cerca del 11% del PIB. Sumado a los aportes de agencias privadas, ONG y otros, la cifra se eleva a un 15% (Grebe, 2002). También pudo reprogramar su deuda financiera gracias a los recursos donados por Europa y, hasta hace poco, recibía financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento, además de financiamiento de carácter bilateral desde Japón, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos. La mayor parte de estos apoyos estaban condicionados al cumplimiento de metas sobre control del narcotráfico, incluyendo la erradicación del cultivo de la hoja de coca. Por ello, la resistencia cocalera al cumplimiento de metas otorgaba al conflicto una importancia nacional.

Los cocaleros aprovecharon esta centralidad y lograron poner en el debate el problema a través de tres estrategias de protesta: la marcha, la huelga de hambre y el bloqueo de carreteras (Camacho, 1999). Articulando un discurso contra la erradicación y poniendo en relieve la distinción entre coca y cocaína, los cocaleros apelaron a los símbolos de la cultura andina para reivindicar la hoja de coca. De esta forma, lograron el apoyo de otros movimientos sindicales y campesinos, así como de la clase media intelectual (Camacho, 1999).

De la defensa de la hoja de coca, el movimiento cocalero transita rápidamente a la defensa de la soberanía nacional y a la crítica al modelo económico: buscan insertarse en estructuras de decisión y representación, apelando a la inclusión de los sectores indígenas y campesinos. Beneficiándose de la nueva estructura municipal dada por la Ley de Participación popular, el movimiento decide integrarse a las estructuras territoriales que permitan mejorar la calidad de vida en el trópico y establece alianzas con sectores ideológicos relativamente semejantes. En 1995, en unión con Izquierda Unida, el movimiento obtiene 49 concejalías y diez alcaldes en municipios cocaleros. Sería el inicio de una larga trayectoria destinada a terminar en la casa de gobierno.

La tesis del instrumento político y la representación en el congreso

El momento clave en la configuración del movimiento cocalero se produce cuando varias organizaciones reunidas en un congreso realizado en 1995 (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia –CSUTCB–, Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia –CSCB–, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia –CIDOB–, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa –FNMCB–BS– y las seis federaciones del trópico de Cochabamba), deciden conformar un organismo político basado en las estructuras sindicales.

La idea central es generar un brazo político que canalice los intereses de la organización sindical a nivel nacional. En este momento, el movimiento cocalero afianza su demanda por la inclusión de campesinos e indígenas en las estructuras formales de representación, desde una óptica

distinta: los dirigentes políticos estarán sometidos a la estructura sindical que les dio origen. Los candidatos serán elegidos en asambleas sindicales, incluyendo la posibilidad de revocarlos y reemplazarlos.

La conformación del instrumento va a representar una reorganización de los actores políticos. Hasta ese momento, el surgimiento de demandas y actores había sido sistemáticamente ignorado por el sistema político, en particular por su sistema de partidos. Éste último se estructuraba en torno a una dinámica de multipartidismo moderado (Mayorga, 2005). Esta dinámica implicaba la reducción progresiva del número de fuerzas políticas: esto dio origen a una tríada partidista¹⁰ que a través de discursos con escasa distancia ideológica, se alternaban en el poder mediante la formación de coaliciones. La dinámica de esta tríada, conocida como competencia partidaria centrípeta (Sartori, 1980), excluía sistemáticamente a los nuevos sujetos políticos, lo que sumado a la corrupción y el clientelismo convirtieron a los partidos en la arena política en organizaciones impermeables a los procesos sociales emergentes.

Las características de los movimientos y la impermeabilidad de los partidos frente a las demandas abrirán una brecha entre el sistema político institucional y la población. Esta brecha se hará visible en el creciente descontento frente a la gestión de los partidos políticos y las instituciones democráticas, manifestándose en un crecimiento de los movimientos y fuerzas políticas excluidas.

En 1997, luego de algunos problemas internos con la alianza Izquierda Unida – Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y beneficiándose del sistema proporcional de asignación de escaños uninominales, los cocaleros consiguen cuatro diputados, entre ellos, el líder de las Cinco Federaciones, Evo Morales. En 1999, se crea el MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) con Evo Morales a la cabeza. En un nuevo proceso de elecciones municipales, el MAS (Movimiento al Socialismo) lanza una campaña casa a casa que consolida una vez más su dominio en el trópico, ganando un quinto de las alcaldías del departamento (Zegada, 2002).

10 Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacional (ADN) y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

La presencia de los diputados de la coalición cocalera - izquierda extra-parlamentaria generó dos grandes efectos: por una parte, al introducir un sector radicalizado a la discusión política, los partidos tradicionales debieron romper sus alianzas estratégicas al ser confrontados en relación con temas que antes no estaban en el debate público.

Por otro lado, el movimiento cocalero se benefició al poseer una vitrina pública para exponer sus demandas, fortaleciéndose y sumando una mayor cantidad de apoyo. A pesar de no tener capacidad de imponer una agenda parlamentaria, el movimiento cocalero perfiló a su principal dirigente, generó un discurso de alcance nacional capaz de interpelar a las clases bajas y medias, del mundo rural y urbano y pudo afianzar una red de alianzas que le servirían para la posterior elección. En términos generales, la participación cocalera implicó una reorganización del campo ideológico que transformó el sistema de partidos convirtiéndolo en un sistema multipartidista polarizado (Mayorga, 2005), caracterizado por una fuerte polarización ideológica.

Hasta este momento la iniciativa cocalera no es más que ganancia. Dado el reducido número de parlamentarios, el control sindical sobre los diputados aún es estrecho y se mantiene una fluida comunicación entre base sindical y dirigentes. El principal desafío tiene que ver con apropiarse de un espacio, moldeado política e ideológicamente por las élites: implica conjugar el “hacer política de lo sindical” con el “hacer política parlamentaria”. Dado que el debate se encuentra altamente tecnocratizado y los diputados cocaleros/ indígenas se encuentran en desventaja en términos de capital cultural, un obstáculo de este primer momento es la capacidad de superar el racismo.

La presidencia de Evo y la asamblea constituyente

El panorama cambia a partir de las elecciones de 2002. A partir de una batalla comunicacional, el MAS logra obtener 7 senadores y 25 diputados, de un total de 130 congresistas. Sumado a este triunfo, el movimiento cocalero logra poner a Evo Morales a menos de dos puntos porcentuales de Gonzalo Sánchez de Lozada. Por primera vez una fuerza política radicalizada alcanzaba veinte puntos de votación y disputaba el sillón pre-

sidencial. Esta victoria pone en evidencia la crisis del sistema político, representando una victoria que desarma a las élites y genera reacciones que, en lugar de parar su crecimiento, la acrecientan.

Con una bancada numéricamente considerable, el MAS deberá enfrentar dificultades que en la gestión parlamentaria anterior fueron soslayadas. En primer lugar, se verá obligado a concretizar un discurso de gran fuerza interpelante en la acción parlamentaria concreta. El discurso cocalero, articulado sobre la base de grandes antagonismos, era exitoso pues diluía las diferencias entre sectores subordinados, agrupándolos en dos sectores: pueblo/ élites. La gestión parlamentaria requería especificidad en torno a diversos temas que no concitaban respaldo entre las distintas bases de apoyo del MAS. En esta etapa, será un desafío para la organización mantener su discurso y su base de soporte.

Con una bancada numerosa y con el fin de incrementar alianzas, el MAS debe imponer una agenda parlamentaria, debatir y obtener triunfos. Dada las condiciones que señalábamos, este punto fue el más débil. La bancada no pudo marcar pautas de discusión, ni tampoco pudo vetar y discutir con la bancada conservadora. La mayor cosecha del movimiento fue la plataforma comunicacional que obtuvo y que le permitió irradiar su discurso.

A pesar de ello, las bases de la estructura sindical comienzan a sentir descontento. Lejos de la dinámica parlamentaria, los miembros de los sindicatos buscan explicación de por qué sus diputados no logran avances en materias sustantivas. El ajetreo de los parlamentarios no deja espacio para que constantemente “vuelvan a las bases”, lo que resiente el control sindical. El MAS va mutando de brazo político de la estructura sindical a fuerza política institucionalizada.

A pesar de los desgastes de una prematura parlamentarización, en las elecciones de 2005, el MAS logra una mayoría parlamentaria inédita: no sólo consigue 72 diputados y 12 senadores, consigue la elección de Evo Morales como presidente de Bolivia: el discurso cocalero había calado hondo, interpelando no sólo a los sectores indígenas y campesinos, sino también a las capas medias e intelectuales.

Hoy el movimiento cocalero se sitúa en el centro de una complicada gestión gubernamental. Desde principios del mandato de Evo Morales y luego de la derrota electoral que sumió a los partidos conservadores en

crisis, las élites bolivianas lograron establecer una alianza opositora estable. A partir de la demanda regional, los sectores conservadores de la política boliviana han declarado la guerra al gobierno de Morales.

Por otro lado y dada la política respecto a la hoja impulsada por el dirigente cocalero, las agencias de cooperación internacional han retirado sus apoyos al observar un aumento de doce mil a veinte mil hectáreas de cultivos de coca durante el gobierno de Morales. El gobierno no ha podido establecer fuertes restricciones al cultivo de la hoja de coca en concordancia con su origen cocalero. Ha apelado a la “racionalización voluntaria”, un mecanismo de erradicación facultativa sin compensación que permite al gobierno cumplir con las metas de erradicación, lo cual ha significado un sacrificio para los cocaleros, los que si bien han tratado de cumplir con las metas, se encuentran en condiciones de desprotección al no existir planes de desarrollo alternativo desde el retiro de las agencias de cooperación. A pesar de esto, el núcleo cocalero ha mantenido un apoyo inamovible a sus dirigentes: frente a la crisis de la asamblea constituyente, las seis federaciones del trópico convocaron a movilizarse a Sucre a defenderla.

De la misma forma, el MAS ha tenido que enfrentar las críticas de movimientos radicalizados, quienes le acusan de haberse convertido en un partido tradicional, de retardar los procesos y de desvirtuar la Agenda de Octubre, creada a partir de las movilizaciones que culminaron con la caída de Sánchez de Lozada. Tanto frente a la derecha como frente a la izquierda radicalizada, el MAS ha tenido que transitar hacia posiciones moderadas en busca de un consenso que permita ejecutar el programa de gobierno. Ello, sin embargo, tiene fuertes costos para el apoyo popular del MAS.

Una mirada comparativa

Un primer punto al ensayar una mirada comparativa nos remite a la configuración geográfica de la producción cocalera y su importancia en las economías nacionales, elementos que influyen en la organización de los productores y en las agendas políticas de los gobiernos.

La geografía cocalera en Perú abarca una zona dispersa en catorce valles de selva alta a lo largo de diez departamentos poco conectados. Esta

dispersión es importante en el momento en que los cocaleros buscan tejer iniciativas articuladoras: aunque la producción ilegal se centra en los valles del Huallaga y Río Apurímac, el cultivo se desplaza a valles como Aguaytia, a medida que se produce la erradicación. En Bolivia tenemos una producción cocalera concentrada en dos grandes zonas, los Yungas en el departamento de La Paz y el Chapare en Cochabamba configurando un espacio homogéneo geográficamente que facilita la coordinación.

Por otro lado, es importante reparar en el peso socioeconómico de la producción de coca en cada uno de los países analizados. En el caso boliviano, la economía de la coca llegó a posicionarse como una actividad primordial. Aún cuando las estimaciones de la importancia de la economía de la coca en relación al PIB varían de una institución a otra, podemos decir que en el año de mayor auge (1984) representaba entre un 95 por ciento y un 55 por ciento del PIB formal, según UDAPE e ILDIS, respectivamente (Coca Antezena, 2000).

En el caso peruano, a pesar de ser el segundo productor de coca, los valles de selva han sido territorios marginales en la dinámica económica nacional: la producción cocalera no tiene repercusión sustancial en el PIB, oscilando en los momentos más álgidos entre el 10 y el 15 por ciento. Esto nos ayuda a entender la prioridad del tema cocalero en las agendas políticas de los gobiernos: si el tema en Bolivia es una prioridad nacional, en Perú es importante por la relación con los Estados Unidos, pero no alcanza el peso de otros temas.

Un segundo punto tiene que ver con los productores de coca, en tanto procedencia geográfica y trayectorias sociopolíticas. Si bien en Perú y Bolivia los cocaleros son migrantes, los procesos migratorios son distintos e influyen en las experiencias organizativas y políticas. En el caso peruano, tenemos una migración procedente de zonas diversas del país: peones agrarios o pequeños propietarios provenientes de la costa y la sierra del país y migrantes indígenas cuyo vínculo comunitario es permanente. En Bolivia, en cambio, hablamos de migrantes indígenas del altiplano y mineros relocalizados. Estos productores llegan, en un proceso medianamente ordenado, trasladando consigo una tradición organizacional propia de las comunidades andinas o mineras. La lengua materna, las costumbres, los ritos, son reproducidos facilitando la cohesión comunal.

La dinámica de colonización cocalera hace que en el Perú, consolidar una organización sea un proceso difícil que implica tejer consensos entre familias que no comparten más que la defensa de la hoja. Además son migrantes de primera o segunda generación que optan por ocupar la selva como una decisión personal, no como parte de estrategias colectivas, sin trayectoria política o sindical. En el caso boliviano muchos de los mineros relocalizados traen consigo la experiencia sindical de la Central Obrera Boliviana (COB), asumiendo la organización cocalera un carácter sindical basado en un discurso ideologizado.

Otro punto importante son las trayectorias organizacionales de los gremios cocaleros de Perú y Bolivia y los procesos políticos nacionales que los atraviesan. En el caso peruano, ésta puede sintetizarse en dos períodos cuyo hito es el conflicto armado. Un primer momento se sitúa en la década del setenta, en que hay confluencia a nivel de valles cocaleros frente a las arremetidas represivas del Estado. Este se trunca por la fuerte presencia de Sendero Luminoso en los valles que fragmenta la incipiente organización. Durante la etapa de violencia, la dinámica de los valles se diferenciará: el valle del Huallaga se configura como base de Sendero y el valle del Apurímac de organizaciones paramilitares. Aquí se moldean estrategias de acción colectiva basadas en la lógica de guerra, que marcarán el desarrollo de la organización en la escena territorial y nacional. Un segundo momento organizacional es a fines de 1999. El contexto de transición genera oportunidades para los actores pues se desmilitarizan las zonas cocaleras afectadas por la violencia política. La constitución de la CONPACC es importante aunque la rearticulación se halla cruzada por conflictos, en tanto el repertorio organizacional genera dinámicas tendientes a la polarización.

En Bolivia, en cambio, el movimiento se da en el marco del declive de los referentes políticos capaces de interpelar a los sectores populares y de una reorganización del campo hegemónico. La desarticulación del movimiento obrero de la COB, el surgimiento del movimiento katarista, el espacio dejado por los referentes “populistas” como CONDEPA (Conciencia de Patria), permiten que el movimiento cocalero tenga lugar en la política nacional. Como vimos anteriormente, el desarrollo del movimiento se puede sintetizar en tres períodos. En la primera etapa, en la que la organización sindical se encuentra articulada en torno a la defensa de

la hoja, existe una crisis económica gatillada por los efectos de los ajustes estructurales, sumada a las polémicas relaciones internacionales del gobierno, en particular con EE.UU., se genera un fuerte descontento en la población, que al no encontrar referente político capaz de recogerlo, será canalizado a través del apoyo al movimiento cocalero, en sus batallas por la defensa de la coca. En una segunda etapa, se ve al movimiento cocalero participando en el espacio político a través de su instrumento político, el MAS. La coyuntura política se encuentra en un momento de acumulación de fuerzas de los movimientos sociales y la crisis de los partidos tradicionales. El surgimiento de movimientos sociales aparte del movimiento cocalero, sus discursos y la permanente exclusión del sistema político va erosionando la legitimidad de los actores institucionales y fortaleciendo la de los movimientos extra-sistémicos. En la tercera etapa, se hace visible la crisis de legitimidad del sistema político boliviano, tanto a través de los resultados electorales como por la conflictividad que hace indiscutible la reorganización del campo político e ideológico.

La identidad construida por el movimiento cocalero en Perú y Bolivia es también un punto en la comparación. A pesar de compartir elementos, las identidades de los movimientos cocaleros peruano y boliviano son divergentes, existiendo componentes distintos de conformación, legitimación y reproducción. Asimismo, las características de los conflictos contribuyen a que las identidades sean divergentes, en tanto la identificación de un antagonista ha variado en función del contexto.

En el caso peruano hay una identidad moldeada por el conflicto armado, tendiente a la polarización, la lealtad territorial y los liderazgos fuertes. La influencia de la política del fujimorismo hace que en la organización se impongan decisiones pragmáticas y con baja densidad ideológica. El tema indígena no es gravitante dada la diversidad de procedencias.

En el caso del Chapare boliviano hay una identidad sustentada en lo indígena y lo sindical. La defensa de la hoja, más el repertorio heredado de la experiencia minera, establece una equivalencia entre coca, hoja de los ancestros y símbolo de la independencia lo que configura un discurso ideológicamente denso y crítico al sistema político.

Teniendo en cuenta que la conformación de identidad implica siempre la identificación de un *otro*, aquello que no somos y que definimos

como nuestro antagonista, en la organización cocalera peruana vemos una identidad fragmentada, con dificultades para identificar adversario. Ello le impide generar alianzas y plataformas con otros movimientos. Un hecho sintomático es el aislamiento en que se encuentran los cocaleros: no participan en centrales campesinas o sindicales y, por tanto, el establecimiento de puentes de comunicación ha sido poco explotado. Los antagonismos son localistas y se centran en el rechazo a las ONG y la cooperación internacional, aunque conforme se avanza en la protesta los reclamos interpelan al Estado y su política antidrogas. En el caso boliviano, la relativa homogeneidad ha generado una identidad fuerte, con claros adversarios en las élites bolivianas, en la intervención extranjera y en los partidos tradicionales. Esta clara identificación, así como la raigambre sindical ha permitido un tránsito hacia una lógica de la equivalencia: la construcción de plataformas comunes ha sido importante y exitosa. Se han establecido alianzas con sectores campesinos o sindicales y con élites intelectuales progresistas, capas medias y organizaciones estudiantiles.

Un último punto de comparación es la concepción del “instrumento político” y la participación en la arena electoral. Cuando se trata de representación política y participación electoral, la propuesta y aceptación de la “tesis del instrumento político” es muy relevante para ambos movimientos: si bien ambos han enfrentado de manera divergente la necesidad de establecer una participación electoral, hay coincidencias en tanto ambas organizaciones cocaleras manifiestan una inquietud de inclusión de las estructuras de representación.

En Perú, la decisión de participar en elecciones parte de la necesidad de tener un espacio de representación institucional. Sin embargo, dada la premura de la coyuntura electoral y los conflictos internos de la CONPACC, la decisión de participar es asumida por las dirigentes cocaleras a título personal, sin llegar a consultar con sus bases. Las dirigentes provenientes del Alto Huallaga participan de las elecciones por el partido de Ollanta Humala consiguiendo éxito en las zonas cocaleras. Una vez finalizada la coyuntura electoral, la dirigencia cocalera se fragmenta y queda pendiente la conformación de un instrumento representativo del movimiento que canalice la victoria electoral parlamentaria y municipal. Hasta

hoy, la dinámica del movimiento cocalero peruano es fragmentada pero con potencial para generar discursos interpelantes capaces de convocar al electorado cocalero.

La tesis del instrumento político nace en Bolivia en el año 1995, como culminación de un proceso de aprendizaje organizacional. Al ser concebido como brazo político de una estructura sindical, el MAS muestra una decisión estratégica de consolidarse como actor político con capacidad de decisión a nivel territorial y nacional. Dado que en su génesis el MAS contiene otros movimientos sociales, sindicales y campesinos, el establecimiento de alianzas se da al interior de manera natural, fortaleciendo el movimiento e irradiando su influencia.

El MAS se beneficia, en términos de partido, en la competencia electoral, de dos elementos del diseño institucional: el primero de ello es la Ley de Participación Popular, aquella que confiere autonomía presupuestaria a los municipios urbanos/ rurales y que hace de este espacio una plataforma electoralmente atractiva. Esto permite al movimiento cocalero consolidar su hegemonía en los municipios del Chapare y posteriormente, del departamento de Cochabamba, visibilizando la organización y sus demandas. En segundo lugar, el instrumento político se vio beneficiado del sistema proporcional de asignación de escaños, en particular en distritos uninominales. Este sistema permite al movimiento cocalero obtener sus primeros cuatro diputados y marcar a partir de esta participación minoritaria una presencia a nivel nacional.

Conclusiones

Lejos de resultar ociosa, la comparación de los procesos peruano y boliviano nos muestra cómo, ante una misma problemática (la producción de coca) se comparten elementos como la demanda de inclusión y reconocimiento, a la vez que existen diferencias organizacionales significativas relacionadas con la especificidad de los procesos nacionales.

A pesar de las trayectorias divergentes, se observa cómo se tejen puntos de encuentro entre las organizaciones de ambos países. Uno de ellos es la acción coordinada de los parlamentarios peruanos y bolivianos, en

torno a la despenalización del cultivo y tránsito de la hoja de coca. Esta acción se basa en las gestiones para la realización de estudios multidisciplinares que respalden la petición a la ONU de retirar de la hoja de coca del registro internacional de drogas y estupefacientes. Los esfuerzos cocaleros por realizar la distinción entre coca/ cocaína y la reivindicación del uso tradicional de ella ha otorgado impulso a esta demanda.

Otro de los puntos de encuentro entre ambas organizaciones guarda relación con el alcance democratizador de la participación cocalera en el terreno electoral. Esta participación no sólo ha generado una plataforma a través de las cuales mostrar sus demandas y propuestas, sino también ha impulsado la apertura de estas estructuras a otros sectores marginados del sistema político. Si bien, tanto los cocaleros de Perú como los de Bolivia han mostrado su capacidad de dirimir conflictos a través de la protesta y la movilización, existe un afán por sobrepasar la demanda sectorial y disputar el poder de los espacios de representación, cuestionando estructuras que excluyen y marginan a amplios sectores de la población.

La organización cocalera ha puesto en el centro del debate la forma de enfrentar la guerra contra las drogas. Hay un cuestionamiento profundo a la actual estrategia que privilegia atacar al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico como son los productores, descuidando la prevención del consumo, el lavado de dinero o la comercialización de insumos químicos. Existe una sospecha fundamentada de que las políticas antidrogas se enmarcan en una estrategia intervencionista de EE.UU. sobre América Latina. Ello es evidente en el caso de países productores como Bolivia y Perú, que deben responder constantemente a compromisos impuestos como la “certificación”, puesto que estas metas condicionan otro tipo de apoyos económicos necesarios para ambas naciones. Ello no sólo afecta la soberanía de estos países en términos de definir sus políticas nacionales, sino que merma su capacidad de generar nuevas formas de resolución de conflictos en las zonas cocaleras.

En términos generales, podemos decir que tanto el movimiento cocalero peruano como el boliviano han mostrado el fracaso de las políticas antidrogas centradas en el aspecto represivo y militar. Así, hemos visto como se ha impuesto una visión de la problemática cocalera centrada en el tema del desarrollo y la pobreza en un contexto en que los actores se

ven constreñidos a mantener el cultivo ante la ausencia de planes de desarrollo agrario sustentable en ambos países.

En suma, hay un desafío por profundizar en la complejidad del problema cocalero a nivel regional y en sus diversas conexiones internacionales, desde una perspectiva que abarque los procesos políticos, económicos y las dinámicas de los actores sociales. En ese sentido, queda pendiente el análisis de cómo los gobiernos de Evo Morales y de Alan García asumirán este desafío.

Bibliografía

- Agreda, Evelin; Norma Rodríguez; Alex Contreras, Alex (1996). *Mujeres Cocaleras, marchando por una vida sin violencia*. Cochabamba: Comité Coordinador de las Cinco Federaciones del Trópico de Cochabamba.
- Ballesteros, Ignacio; Cecilia Illanes; Mirtha Suáznabar (2001). Organizaciones sindicales de productores de coca. Compleja lucha de reivindicación y estigmatización. *Boletín Internacional Acción Andina*, Año 1, Nº.1; Editorial Acción Andina.
- Cabieses, Hugo (1998). La organización de los cocaleros: Pocos pero significativos. *Ideele* Nº. 121
- Camacho, Natalia (1999). “La marcha como táctica de concertación política”. En *Empujando la concertación. Marchas campesinas, opinión pública y coca, coord.* Laserna, Roberto; N. Camacho; E. Córdova. Cochabamba: CERES - PIEB.
- Coca Antezena, Óscar (s/d) “Causas y efectos económicos de la coca en el Chapare boliviano”. (<http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/Coca.pdf>)
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004). *Informe Final*. Tomo IV: Historias Regionales, 1.1 La región Sur central - El Valle del Río Apurímac.
- Flores, Gonzalo y José Blanes (1984). *¿Dónde va el Chapare?* Cochabamba: Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES.

- Gootenberg, Paul (2003). *Entre la coca y la cocaína*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Documento de Trabajo N° 13.
- Grebe, Horst (2002). “Las relaciones económicas externas de Bolivia en la globalización financiera”. En *La globalización económico-financiera. Su impacto en América Latina*, Julio Gambina (comp.). Buenos Aires: CLACSO.
- Lanza, Gregorio (1999). *La Coca Prohibida*. Cochabamba: CEDIB.
- Mayorga, René (2005). “La crisis del sistema de partidos y el experimento del gobierno sin partidos en Bolivia”. *Revista Futuros* 9, Vol. III. (http://www.revistafuturos.info/indices/indice_9_home.htm)
- Melucci, A. (2002). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México: Colegio de México-Centro de Estudios Sociológicos.
- Rodríguez, Gustavo (2000). “Los mineros de Bolivia en una perspectiva histórica”. En: *Opiniones y Análisis* 52. La Paz: Fundación Hanns-Siedel.
- Sartori, Giovanni (1980). *Partidos y sistemas de partidos*. Madrid: Alianza Editorial.
- Stefanoni, Pablo (2003). “Hegemonía, discursos y poder”. En: *Temas sociales*. La Paz: UMSA.
- _____ (2004). “Conflicto social, crisis hegemónica e identidades políticas en Bolivia”. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/sin%20usar/JOV%2002%20MOVIMIENTOS%20SOCIALES/stefanoni%20art%EDculo.doc>
- Zegada, María Teresa (2002). “Dinámica política en el Trópico: actores, conflictos y estrategias destructivas”. En: *Futuro del Trópico de Cochabamba. Escenarios para el desarrollo sostenible*, Álvaro Argandoña y Carla Ascarrunz (comp.). Cochabamba: Universidad Mayor de San Simón (UMSS) – Centro de Estudios de Población (CEP).

Movimientos indígenas en contra del Plan Puebla Panamá

Maya Collombon Bermúdez*

Introducción

El 12 de octubre de 2002, para el aniversario de los 510 años de la primera invasión de América, una serie interrelacionada de bloqueos de carreteras se dan conjuntamente de México hasta Panamá. Esta primera movilización transnacional de pueblos de México y toda Centroamérica se debe a la oposición creciente en estos países en contra del Plan Puebla Panamá (PPP) y por ende del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Analizaremos la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá, una nueva realidad dentro de las relaciones internacionales entre México y Centroamérica; aquello que dentro del Plan Puebla Panamá provoca la desaprobación de los movimientos sociales como este día de octubre 2002; y, por qué este proyecto moviliza en particular a los pueblos indígenas. Estas movilizaciones anti-PPP me llevan a hacer la hipótesis que algunos pueblos indígenas han llegado a un punto de concienciación política más avanzada que les permite re-usar algunos componentes característicos de la globalización para defender una concepción social y política alternativa a la globalización neoliberal.

* Instituto de Ciencias Políticas – Universidad Aix-Marseille III, Francia.